

RESEÑA DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES ESTATALES QUE TIENEN PROGRAMAS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PAÍS

Ministerio Del Interior

El Ministerio del Interior es el ente del nivel central responsable de la formulación y adopción de la política Gubernamental, encaminada a fortalecer el Estado Social de Derecho, para asegurar la paz y la convivencia de nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

Sus principales funciones son: formular, coordinar y evaluar políticas en materia de descentralización, ordenamiento y autonomía territorial, desarrollo institucional y las relaciones políticas entre la Nación y las entidades territoriales. Además, coordinar y evaluar la política de Estado dirigida a la protección de minorías y a la reducción de las desigualdades originadas en la discriminación étnica y cultural.

Dirección General De Asuntos Indígenas

La función de Asuntos Indígenas estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura hasta 1960, año en el cual mediante Decreto 1634 se traslada la antigua Sección de Asistencia Indígena de la División de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, como División de Asuntos Indígenas integrada por las Secciones de Resguardos y Parcialidades y de Protección Indígena, al entonces Ministerio de Gobierno.

Esta reorganización tubo base en la reforma administrativa, como uno de los propósitos del Frente Nacional, impulsado por la Ley 19 de 1958. Ese mismo año se promulga la Ley 81 sobre Fomento Agropecuario de las Parcialidades Indígenas, la cual crea el Instituto Indigenista Colombiano y se organiza una oficina llamada “Sección de Negocios Indígenas” en los departamentos donde existían diez o más parcialidades.

En 1968 mediante Decreto 3159 se establece en el entonces Ministerio de Gobierno la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad, con dos Divisiones: Acción Comunal y Asuntos Indígenas. A partir de este año y hasta 1991, las funciones de asuntos indígenas fueron mantenidas en las reestructuraciones administrativas efectuadas en 1974 mediante Decreto 659 y en 1976 mediante Decreto 126.

En 1991 por medio del Decreto 2035 se eleva a categoría de Dirección General de Asuntos Indígenas la entonces División, integrándose en ese entonces por la División de Investigaciones y Estudios Indigenistas, División de Fomento y Coordinación Interinstitucional, Sección Legal de Asuntos Indígenas y las Comisiones regionales para los Asuntos Indígenas.

En 1995, mediante la Ley 199 se cambia la denominación de Ministerio de Gobierno por Ministerio del Interior y como reglamentario se expide el Decreto 372 de 1996, manteniéndose la calidad de Dirección General de Asuntos Indígenas, integrada por las

Subdirecciones de Políticas y Coordinación Interinstitucional y de Promoción y Desarrollo Intercultural; y, las Comisiones Regionales para los Asuntos Indígenas.

En 1999, con la reestructuración del Ministerio, tanto la Dirección como las Subdirecciones continúan atendiendo la temática indígena. Las Comisiones Regionales de Asuntos Indígenas son suprimidas y se crean cinco Zonas de Asuntos Indígenas, las cuales se reglamentaron mediante Resolución del Ministerio en el año 2000.

La Dgai se fundamenta en dos hechos de vital importancia para el cuerpo normativo que regula las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas: la expedición de la Ley 21 de 1991, que ratificó el Convenio Internacional No.169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas en países independientes y la expedición de la Constitución Política de 1991.

Ministerio Del Medio Ambiente

El Ministerio del Medio Ambiente fue creado por medio de la 99 de 1993, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental -Sina-.

El Ministerio tiene bajo su responsabilidad impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. Además, deberá fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo ambiental de los recursos naturales de las culturas indígenas y demás grupos étnicos.

El -Sina- es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible. Así lo describe la Ley 99 de 1993 que dio vida a la mayor reforma ambiental emprendida por el país en toda su historia, para proponer un nuevo esquema de gestión ambiental con mayor estatus, recursos e instrumentos de los que jamás tuvo. El Sina propone integrar a los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en el tema ambiental con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental descentralizado, democrático y participativo

Cuenta con una Dirección de Investigaciones, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, desde donde se ha establecido un Convenio Marco Mianambiente-Organización Indígena de Antioquia -OIA- para trabajar una Agenda Etnica que contemplará entre otros aspectos: la consolidación y actualización del diagnóstico de aspectos ambientales en territorios indígenas, así como los planes de vida y potenciará a través de experiencias del SINA, el manejo adecuado del medio ambiente

Ministerio de Educación Nacional

Entre sus objetivos están: “Procurar que la educación forme al colombiano en el respeto a los valores que defienden la convivencia, los derechos humanos, la paz y la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para lograr el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección del ambiente. Velar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de regulación inspección y evaluación, para lograr la formación moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos. Garantizar el adecuado cubrimiento del servicio público de la educación con la participación de las entidades territoriales, la sociedad y la familia. Promover la formación integral de los colombianos, considerando la prevalencia del derecho fundamental de los niños a la educación, la educación de las personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, y la educación de los grupos étnicos en el respeto y desarrollo de su integridad cultural. Impulsar y promover el potencial del talento humano, como elemento fundamental para lograr procesos de desarrollo sostenible en el País”.

Entre sus principales funciones están: formular la política nacional de educación y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura de la educación, tales como la formación y promoción del docente; los recursos y métodos educativos; la innovación e investigación científica tecnológica; la orientación educativa y profesional; el crédito educativo; la autonomía universitaria y escolar; el gobierno escolar; la participación y la organización juvenil; la educación física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, y la inspección y la evaluación del proceso educativo, mediante la participación, discusión y generación de acuerdos, manteniendo la cohesión del Sector. Preparar y proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, convocando a los entes territoriales, a las instituciones educativas y a la sociedad en general, de manera que se atiendan las necesidades del desarrollo económico y social del país.

En cuando a los programas para comunidades indígenas, se debe partir de 1976 en que aparece la primera iniciativa en este campo. Por medio del Decreto Ley 088 de 1976 se da una mirada a la realidad escolar en algunas comunidades indígenas, luego, por medio del Decreto 1142 de 1978 se concretaron algunas de las exigencias presentadas por los pueblos indígenas. A la luz de sus planteamientos surgieron varios procesos educativos impulsados por las organizaciones indígenas y el mismo Ministerio de Educación. Por medio de la Resolución 3454 de 1984 esta entidad crea el grupo de Etnoeducación. Dicho grupo logra tal desarrollo que en 1992 y bajo el Decreto 2127 se establece la División de Etnoeducación Nacional. A pesar de que la División tuvo muchos adelantos, bajo la reestructuración del Ministerio de Educación en 1994 fue nuevamente convertida en equipo de trabajo.

En esto se tradujo el “Programa Nacional de Etnoeducación en Comunidades Indígenas”. Se describía a sí mismo como un programa que buscaba representar el servicio público educativo dirigido a la atención de los pueblos indígenas, constituyéndose en una alternativa pedagógica que le permitiera a los mismos, formular y desarrollar propuestas educativas teniendo en cuenta sus características propias en el marco de los planes de vida,

El plan sobre el cual reposaban la mayoría de las premisas del proyecto de etnoeducación se edificaba en la ratificación y cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución de Colombia que a su vez ratificaba el Convenio 169 de la OIT, la ley 115 de 1994, y los demás decretos reglamentarios concernientes a la prestación del servicio público educativo pertinente a los pueblos indígenas de Colombia, acorde a sus usos y costumbres.

Ministerio De Salud

Tiene como Misión Orientar el Sistema General de Seguridad Social hacia su integración y consolidación mediante la aplicación de los principios básicos de universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia y equidad con el objeto de garantizar la promoción efectiva de la salud de todos los colombianos. El Ministerio será la autoridad reconocida y acatada de un Sistema General de Seguridad Social en Salud integrado y consolidado, que promueve y protege la salud de todos los colombianos, guiados por los siguientes valores: excelencia, transparencia, ecuanimidad, responsabilidad y respeto”.

La Ley 691 de 2001 reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social. Esta ley establece los derechos a la salud de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad cultural de tal manera, que se asegure su permanencia social y cultural, según los términos establecidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales y las demás leyes relativas a los pueblos indígenas.

Además de las autoridades competentes, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ley reconoce de manera expresa las instancias, organismos e instituciones y las autoridades tradicionales de los diversos Pueblos Indígenas en sus territorios, para lo cual siempre se tendrá en cuenta su especial naturaleza jurídica y organizativa.

Procuraduría General De La Nación

La Procuraduría General de la Nación es un organismo que encarna al Ministerio Público, es decir representa a la sociedad colombiana, supervigila la conducta de los servidores públicos, y defiende el orden jurídico y los derechos fundamentales.

Su visión se funda en una estrategia de actividades preventivas y represivas para una mejora sustancial en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

La política institucional resalta la ética pública, democracia y participación, servicio a la comunidad, interacción con el ciudadano, respeto a los derechos, a la individualidad, la equidad y la igualdad, respeto por la institucionalidad estatal y justicia material.

Entre los principios de función administrativa, se destacan la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y prevalencia del interés general sobre el particular.

Se hace hincapié en los Principios Institucionales. En cuanto a cultura del servicio público, se puntualiza sobre la pertenencia institucional, prestación del servicio con calidad, prontitud, oportunidad, eficacia y eficiencia, Responsabilidad - Trabajo en equipo, Creatividad y consenso.

Por medio del artículo 97 de la Ley 99 de 1993, se crea y se le fijan funciones a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y por medio del Decreto 1156 de 1999, se reestructura la Procuraduría General de la Nación. Las Procuradurías Delegadas tienen funciones de vigilancia superior, con fines preventivos y de control de gestión. Entre sus funciones tienen la de intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas o los resguardos indígenas.

Además, las Procuradurías Delegadas intervendrán, como Ministerio Público, en las actuaciones y ante las autoridades administrativas y de policía, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas y los resguardos indígenas.

Los Procuradores Delegados ejercerán las siguientes funciones de intervención judicial en procesos civiles y agrarios: Intervenir como Ministerio Público ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas o los resguardos indígenas.

Departamento Nacional de Planeación DNP

En 1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. En 1968, estas entidades se transformaron en el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y en el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, respectivamente.

El DNP es un departamento administrativo que depende directamente de la Presidencia de la República y pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público. Su misión es diseñar, hacer viable y controlar las políticas de desarrollo económico, social y ambiental del país, en coordinación con los ministerios y las entidades territoriales.

El DNP tiene como objetivos fundamentales la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados, de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector público. Además, debe realizar de forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional y proponer los planes y programas para el desarrollo económico, social y ambiental del país, y con el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- constituyen el conducto por medio del cual el Presidente de la República ejerce su función de máximo orientador de la planeación nacional.

En cuanto a los objetivos cuatrienales tiene bajo su responsabilidad lo siguiente: formulación y elaboración del plan, armonizando los objetivos nacionales, sectoriales y regionales de mediano y

largo plazo con las políticas gubernamentales y los diagnósticos generales de la economía y sus principales sectores en materia económica, social y ambiental. En la asignación debe buscar la mayor productividad en el uso de los recursos y equidad por grupos sociales y regiones. En el seguimiento y evaluación del plan organizará los sistemas de evaluación de gestión, de resultados y de impacto de las políticas y programas gubernamentales de nivel nacional y selectivamente de programas y proyectos regionales o territoriales. Conjuntamente con el Ministerio de Hacienda buscará que la distribución del gasto público de funcionamiento e inversión y las transferencias nacionales respondan a parámetros de eficiencia y equilibrio fiscal.

Entre sus funciones se destacan:

1. Proponer estrategias macroeconómicas y financieras, consistentes con las políticas y planes del Gobierno Nacional, de acuerdo con la proyección de los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
2. Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y para su posterior presentación al Congreso de la República; coordinar su ejecución y realizar el seguimiento y la evaluación de gestión y resultados del mismo.
3. Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales o las regiones administrativas y de planificación y las demás entidades que establezca la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se organicen en desarrollo de los Artículos 306 y 307 de la Constitución Política.
4. Aprobar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como para la identificación, formulación y evaluación de los proyectos financiados con los recursos del Presupuesto General de la Nación.
5. Coordinar a todas las entidades y organismos públicos para garantizar el debido cumplimiento y ejecución de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
6. Dirigir, coordinar y dar cumplimiento a las políticas de inversión pública, garantizar su coherencia con el Plan de Inversiones Públicas.
7. Diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión. En todo caso el Departamento Nacional de Planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.
8. Suministrar al Presidente de la República informes periódicos y los demás que éste solicite acerca del cumplimiento de los planes de desarrollo y asesorarlo en la preparación del informe que sobre la misma materia debe presentar anualmente al Congreso de la República.

9. Participar en las gestiones de financiamiento externo o interno relacionadas con los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. Para el efecto, apoyará a los organismos y entidades públicas en la preparación y presentación de proyectos que puedan ser financiados con crédito externo o interno y participará en las correspondientes negociaciones.
10. Estudiar y evaluar el estado y cuantía de la deuda externa pública y privada, y proponer al Consejo Nacional de Política Económica y Social, las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo sin exceder la capacidad de endeudamiento del país. Para el ejercicio de esta función, el Departamento podrá solicitar el registro de los correspondientes compromisos.
11. Diseñar, reglamentar, sistematizar y operar el Banco de Proyectos que deberá incluir los proyectos financiables, total o parcialmente, con recursos del Presupuesto General de la Nación, y determinar los proyectos que se deben incluir en la Ley Anual del Presupuesto.
12. Llevar el registro de los proyectos que hayan sido declarados por los respectivos ministerios como viables, para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías y recomendar la priorización de la asignación de recursos a estos proyectos.
13. Diseñar las metodologías para declarar viables proyectos a ser financiados con recursos de regalías o compensaciones.
14. Preparar, con la colaboración de los organismos y entidades pertinentes, políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el estímulo a la actividad productiva y la inversión privada.
15. Participar en la evaluación de los proyectos de inversión privada nacional o extranjera que requieran intervención del Gobierno Nacional.
16. Emitir concepto previo para la iniciación de negociaciones encaminadas a la concertación de acuerdos de complementación o programas sectoriales de desarrollo e intercambio comercial, de carácter bilateral o multilateral, y vigilar su realización.
17. Ejercer las funciones atribuidas al Departamento Nacional de Planeación, por la Ley 715, relacionadas con las transferencias a las entidades territoriales y a los resguardos indígenas, conocidas como Sistema General de Participación. Hacer seguimiento y evaluación a la ejecución de los recursos de transferencias asignados a las entidades territoriales y a los resguardos indígenas.
18. Conceptuar sobre la creación de nuevos departamentos y municipios, cuando fuere el caso, según las normas vigentes.
19. Promover la realización de actividades tendientes a fortalecer los procesos de descentralización y modernización de la gestión pública.

20. Participar en el diseño de la política para la prestación de servicios públicos domiciliarios, a través de las Comisiones de Regulación, y promover su adopción por parte de las empresas de servicios públicos.
21. Trazar las políticas generales y desarrollar la planeación de las estrategias de control y vigilancia, para la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios.
22. Diseñar las metodologías de estratificación y diseñar sistemas de seguimiento y evaluación de dichas metodologías.
23. Orientar y coordinar la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos realizados por las entidades adscritas y vinculadas al Departamento.

El DNP, en calidad de Secretaría Técnica del Conpes, tiene las siguientes funciones:

1. Presentar para su estudio y aprobación la programación macroeconómica anual.
2. Someter a su consideración el Plan Nacional de Desarrollo, en los términos señalados en la Ley Orgánica del Plan.
3. Presentar, para su aprobación, las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional.
4. Presentar, para su análisis, estudios sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas, estrategias, programas y proyectos del Gobierno Nacional.
5. Someter a su estudio y aprobación las bases y criterios de la inversión pública.
6. Presentar para su estudio y aprobación el plan financiero del sector público.
7. Presentar para su estudio y aprobación el plan operativo anual de inversiones.
8. Presentar para su estudio y aprobación el programa de desembolsos de crédito externo del sector público.
9. Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados con la celebración de los contratos de empréstito de la Nación o de las entidades públicas, en los términos previstos por las disposiciones legales vigentes.
10. Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados con el otorgamiento de garantías por parte de la Nación a los contratos de crédito interno o externo de las entidades públicas, en los términos previstos por las disposiciones legales vigentes.
11. Presentar, para su estudio y aprobación, el monto y distribución de las utilidades y los superávits de las entidades descentralizadas.

Departamento Nacional De Estadística -Dane-

El Dane fue creado el 14 de octubre de 1953 -Decreto 2666-; posteriormente fue reorganizado en 1968 -Decreto 3167-; en diciembre de 1992, se llevó a cabo una reestructuración -Decreto 2118-. Mediante Decreto No.1174 del 29 de junio de 1999, se adscribe el Dane al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Posteriormente, por medio del Decreto 1151 de 2000 se hizo una nueva reestructuración y se realizaron ajustes y modificaciones a la planta de personal, la cual fue aprobada mediante el Decreto 1187 del 28 de junio de 2000.

El Dane es el órgano rector del Sistema Nacional de Información Estadística, que tendrá como misión fundamental la de garantizar la disponibilidad, calidad e imparcialidad de la información estadística estratégica para el desarrollo social, económico y político del país. Como rector del Sistema Nacional de Información Estadística, regula la producción y difusión de las estadísticas oficiales estratégicas y establece los mecanismos de coordinación e integración de los servicios estadísticos nacionales y territoriales, de acuerdo con el principio de centralización normativa y descentralización administrativa. Para el 2005, será el líder rector de la información estadística en Colombia en el ámbito nacional y territorial; usará tecnologías modernas para la atención a sus clientes y gozará de gran prestigio en el medio estadístico internacional.

Entre las funciones del Dane se destacan:

1. Coordinar, desarrollar y reglamentar el Sistema Nacional de Información Estadística.
2. Definir la información estadística básica y estratégica que deba generarse a nivel nacional, sectorial y territorial; producir y asignar y/o delegar la responsabilidad de producirlas y desarrollar o aprobar las metodologías para su elaboración.
3. Diseñar las estrategias para la integración, desarrollo e implantación del Sistema Nacional de Información Estadística, reglamentar su funcionamiento y coordinar la actividad de sus integrantes.
4. Diseñar, planificar, dirigir y ejecutar los censos de población, vivienda, económicos y las encuestas orientadas a la generación de las estadísticas estratégicas, directas y/o derivadas, que requiera el país para la planeación y toma de decisiones por parte del gobierno nacional y los entes territoriales.
5. Promover, coordinar y asesorar, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística, la elaboración y ejecución de planes estadísticos sectoriales y territoriales.
6. Certificar la población de los departamentos, municipios y resguardos indígenas, para la distribución de los recursos relacionados con el Sistema General de Participación.

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-

Fundado en 1961 mediante la Ley 135 de reforma agraria. En esa oportunidad se incluyeron dos normas referentes a los pueblos indígenas, artículos 29 “...no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, si no únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”. Artículo 94: “El Instituto (de la Reforma Agraria) constituirá, previa consulta con el Ministerio de Gobierno, resguardos de tierras, en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no las posean”.

La misión del instituto consiste en “Contribuir al desarrollo productivo y social de la población campesina, indígena, negra y mujer, garantizando el acceso a la tierra y a los demás factores del desarrollo rural, en el marco del ordenamiento territorial, la planeación participativa, la competitividad y la equidad social”.

Uno de sus objetivos se refiere a “Contribuir al ordenamiento territorial, propiciando el desarrollo integral sostenible y la racionalidad productiva, así como la delimitación de la territorialidad indígena y afrocolombiana”.

Entre sus funciones está la de “Delimitar las tierras de propiedad de la Nación, de las de los particulares. También podrá adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo y las pertenecientes a las comunidades negras, para los fines previstos en el artículo 48 de la presente ley “, o ley 160 de 1994.

Dentro de la gestión actual del Incora en el Área de Ordenamiento Social de la Propiedad, están: constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos indígenas y de conversión de reservas indígenas en resguardos.

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar -Icbf-

El Instituto CBF se creó en el año 1968 mediante la Ley 75 del 30 de diciembre decreto distrital ese mismo año. Es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud.

Tiene por objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos y está dirigido y administrado por un Consejo Directivo y un Director General quien se encarga de dirigir, organizar y ejecutar el servicio de bienestar familiar con una estructura desconcentrada.

Entre sus actividades se destaca el apoyo a sectores poblacionales específicos, entre ellos:

Apoyo para el fortalecimiento social y cultural de grupos étnicos.

Apoyo a familias indígenas en formación y desarrollo.

Apoyo a familias indígenas en su función socializadora con menores de siete años.

Apoyo a familias indígenas para el fortalecimiento de factores protectores de niños y jóvenes de 5 a 18 años.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Esta institución se encarga de liderar en Colombia la elaboración de productos y servicios geográficos que sirvan de insumo para la comprensión especial de las entidades territoriales nacionales, regionales y locales. Es el organismo del Gobierno Nacional encargado de producir, analizar y divulgar la información georeferenciada necesaria para el desarrollo integral de Colombia.

En el área geográfica es el responsable de desarrollar estudios e investigaciones sobre aspectos geográficos del país, comprendiendo su entorno rural y urbano, sus estadísticas físicas,

económicas, humanas, sociales y culturales y sus interrelaciones orientadas a apoyar los procesos de planificación, nacional, regional y local. Igualmente realiza operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales -Decreto 1008 del 1° de Julio de 1995-. Además, por medio de la Ley 223 de 1995, el Igac debe formar los catastros de los resguardos indígenas.

En el área catastral, maneja el sistema de información de tierras basado en el predio para la administración de tierras, la planificación urbana y rural, el ordenamiento territorial, manejo ambiental y desarrollo sostenible.

En el área Agrológica es la responsable del inventario, estudio y monitoreo de los suelos y las tierras del país, para establecer su vocación y aptitud de uso, su extensión. Condiciones de manejo más favorables y calidad por medio de la cuantificación de sus características (químicas, físicas y mineralógicas), como apoyo para el análisis y planeación de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, catastrales y de conservación con miras al desarrollo, planificación y ordenamiento del territorio.

Instituto Colombiano de Antropología e Historia -Icanh-

Se crea el Instituto Colombiano de Antropología mediante Decreto 812 de 1961, en reemplazo del Instituto Etnográfico, hoy denominado como Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este instituto es una entidad de carácter científico y técnico, con autonomía administrativa, que realiza investigaciones antropológicas, arqueológicas e históricas, con miras al desarrollo, defensa, preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural y la memoria del país.

Desarrolla y difunde conocimientos expertos en las áreas de antropología, arqueología e historia colonial, para comprender mejor los procesos sociales, discutir y orientar políticas estatales sobre la diversidad cultural y preservar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de nuestro país.

Desarrolla, asesora y apoya investigaciones en el área de la antropología social, encaminadas a entender problemas sociales cruciales para el país, como son los procesos de permanencia y cambio en grupos étnicos, conflictos inter-étnicos, dinámicas sociales y culturales de la colonización, conflicto social, nuevos movimientos sociales, desplazamiento forzado de poblaciones, procesos de recomposición étnica y dinámicas culturales urbanas.

El grupo de Antropología Social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, desarrolla, asesora y apoya investigaciones en el área de la antropología sociocultural, dirigidas a entender problemas sociales cruciales para el país, como son los procesos de permanencia y cambio entre grupos étnicos, el estudio de los conflictos inter-étnicos, la colonización, el conflicto social, los nuevos movimientos sociales, el desplazamiento de poblaciones, género y familia, la violencia intrafamiliar y los procesos de recomposición étnica, entre otros, así como las dinámicas culturales urbanas.

También difunde los resultados de sus investigaciones y presta asesoría científica a los organismos de carácter público ó privado, en el diseño y ejecución de estudios de impacto

cultural. Promueve mecanismos de integración y apoyo a universidades nacionales e internacionales que trabajen en áreas de competencia de los proyectos que desarrolla. Evalúa y divulga el estado de la investigación sociocultural, auspiciando la discusión académica sobre el particular, en un ámbito interdisciplinario.

En los Programa de Arqueología y Protección del Patrimonio. Organiza esfuerzos para la investigación científica, la protección y la divulgación del Patrimonio Arqueológico Nacional. Se ocupa de la conservación, preservación y mantenimiento de los tres Parques Arqueológicos responsabilidad del Instituto, dos de los cuales, San Agustín y Tierradentro, son Patrimonio de la Humanidad, y el tercero de ellos, Ciudad Perdida, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, está candidatizado como sitio sagrado por Unesco dadas sus características de biodiversidad y pluriculturalidad.

En los Programas de Historia. Contribuye a la investigación de los procesos culturales, políticos y económicos relacionados con las formas de dominación colonial que han tenido lugar en el territorio de la actual República de Colombia y en general en Latinoamérica. Mantiene a través del programa de fuentes documentales un fondo que se ha nutrido con materiales procedentes de diferentes archivos nacionales y extranjeros, así como también dispone de una serie de índices para el trabajo de los investigadores.

Defensoría Del Pueblo

En 1819, durante el Congreso de Angostura, en medio del movimiento independentista en América, Simón Bolívar, a propósito de la forma como debía organizarse el Estado, expresó la necesidad de formar un "poder moral" que le diera a la República una cuarta potestad encargada de la infancia y el corazón de los hombres. "La jurisdicción de este tribunal verdaderamente santo, deberá ser efectiva con respecto a la educación y a la instrucción y de opinión solamente en las penas y castigos..."

Desde entonces, la figura de esta cuarta potestad, vigilante y defensora de los derechos ciudadanos, ha rondado la historia democrática en Colombia. Algunas veces encarnada en la figura del poder legislativo, otras en el Procurador General de la Nación y finalmente, en la figura específica del Defensor del Pueblo, el Ombudsman, dentro del Ministerio Público.

Con la Constitución de 1886, el modelo político del país cambió de un sistema federalista hacia uno de centralización política y estructura unitaria del Estado. En este contexto, sin embargo, el tratamiento que se le dio al Ministerio Público fue de tal importancia, que su campo de acción no tenía equivalente ni en Europa ni en América Latina.

Durante gran parte del siglo XX, la preocupación legislativa frente al Ministerio Público giró en torno a la necesidad de separar las funciones de la Institución y más, cuando la situación de orden público en el país exigió un mayor esfuerzo y trabajo en el tema de la defensa de los derechos humanos.

Antes de la definitiva creación de la Defensoría del Pueblo con la Constitución de 1991, fueron varios los esfuerzos por reglamentar una figura encargada directamente de la defensa y

promoción de los derechos humanos y de la fiscalización de las políticas públicas. Especialmente en las décadas de los años 70 y 80, se impulsaron reformas constitucionales que buscaban la organización de instancias como el "Defensor Cívico". Sin embargo, estas iniciativas, materializadas en las reformas constitucionales de los años 1979 y 1988, resultaron fallidas aplazando el tema hasta 1991.

De las funciones se señalan las siguientes:

1. Promocionar y divulgar los derechos humanos de la población. La Defensoría debe sensibilizar a la población para desarrollar su conocimiento y conciencia respecto a los derechos humanos con el fin de llevarlos a la práctica.
2. Conocer, denunciar y atender las situaciones de violación a los Derechos Humanos
3. Investigar y difundir la situación general de los derechos humanos.
4. Exigir el respeto, protección y realización de los derechos humanos
5. Implementar el uso de mecanismos legales de protección de los derechos humanos
9. Atender y tramitar quejas
10. Interponer acciones y recursos
11. Prestar asistencia y defensa judicial
12. Denunciar públicamente
13. Mediar
14. Promocionar la Participación Ciudadana
15. Definir Políticas e Iniciativas Legislativas
16. Apoyo y Coordinación con los Personeros Municipales
17. Orientación e Información del DIH.
Desarrollo de métodos y pedagogías para sensibilizar, capacitar y educar en DIH. Encauzar e ilustrar a la sociedad civil para que conozca el DIH, sus sistemas de protección, mecanismos para su exigibilidad, ejercicio y protección.

Entre las dependencias de la Defensoría se encuentra la de Indígenas y minorías étnicas. La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión, tiene el deber esencial de velar por la promoción, el ejercicio y divulgación de los derechos humanos, específicamente de los sectores más vulnerables de la población colombiana. Dentro de estos sectores se encuentran, en orden de prioridad, los pueblos indígenas y las comunidades negras, que son consideradas como minorías étnicas.

Es competencia de esta Delegada, promover los derechos fundamentales previstos en el fuero indígena, en la ley 70 de 1993 y en los decretos reglamentarios, los cuales forman el estatuto legal para las comunidades negras e indígenas. Cumple una función de control sobre las entidades del Estado y particulares con el objeto de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos de los indígenas y afrocolombianos¹.

¹ Textos tomados de las páginas Web de la respectiva entidad reseñada.